

DOI: <http://dx.doi.org/10.5902/2236672568170>

Recebido em: 10/10/2021. Aprovação final em: 18/03/2022.

## **EPÍLOGO: REFLEXIONES SOBRE LA PANDEMIA Y LAS SOCIEDADES URBANAS.**

*EPILOGUE: REFLECTIONS ON THE PANDEMIC AND URBAN SOCIETIES.*

*ÉPILOGUE: REFLEXIONS SUR LA PANDEMIE ET LES SOCIETES URBAINES.*

*EPÍLOGO: REFLEXÕES SOBRE A PANDEMIA E AS SOCIEDADES URBANAS.*

*John Gledhill\**



<https://orcid.org/0000-0001-6326-3332>

**RESUMEN:** Este trabajo analiza las condiciones sociales y políticas que hicieron de América Latina un epicentro global de la pandemia en 2020-2021. Aborda la cuestión de los impactos de los padrones de urbanismo sobre el desarrollo de la pandemia, considerando las jerarquías urbanas, las relaciones interurbanas, y las relaciones entre ciudades e interiores rurales, además de la estructuración de las desigualdades socioespaciales dentro de ciudades metropolitanas, las consecuencias de altos niveles de informalidad económica, y formas de gobernanza y coyunturas políticas. Adoptando la perspectiva de Boaventura Santos de que la pandemia es una crisis adicional sumada a más de cuatro décadas de crisis ligada al dominio del capitalismo financiarizado neoliberal, el artículo indaga sobre indicios de que la pandemia ha fortalecido movimientos en busca de alternativas, discutiendo las posibilidades y limitaciones de formas de resiliencia y resistencia populares a la luz de las estructuras de poder social y político vigentes. Concluye con algunas reflexiones sobre lo que la pandemia nos enseña sobre las transformaciones de la vida urbana que serían deseables en una época pospandémica.

---

\* Doctor en Antropología Social; Profesor emérito de la Universidad de Manchester y miembro de la Academia de Ciencias Sociales del Reino Unido y de la Academia Británica; Manchester, Reino Unido; e-mail: johngled@me.com

**Palabras claves:** Covid-19; Urbanismo; Desigualdades; Resiliencia; Procesos políticos.

**ABSTRACT:** *This paper analyzes the social and political conditions that made Latin America a global epicenter of the pandemic in 2020-2021. It addresses the issue of the impacts of patterns of urbanism on the development of the pandemic, considering urban hierarchies, interurban relations, and relations between cities and rural interiors, in addition to the structuring of socio-spatial inequalities within metropolitan cities, the consequences of high levels of economic informality, and forms of governance and political conjunctures. Adopting Boaventura Santos's perspective that the pandemic is an additional crisis added to more than four decades of crisis linked to the dominance of neoliberal financialized capitalism, the article investigates indications that the pandemic has strengthened movements in search of alternatives, discussing the possibilities and limitations of forms of popular resilience and resistance in light of the current social and political power structures. It concludes with some reflections on what the pandemic teaches us about the transformations of urban life that would be desirable in a post-pandemic era.*

**Keywords:** Covid-19; Urbanism; Inequalities; Resilience; Political processes.

**RÉSUMÉ:** *Cet article analyse les conditions sociales et politiques qui ont fait de l'Amérique latine un épiceutre mondial de la pandémie en 2020-2021. Il aborde la question des impacts des modèles d'urbanisme sur le développement de la pandémie, en examinant les hiérarchies urbaines, les relations interurbaines et les relations entre les villes et les intérieurs ruraux, en plus de la structure des inégalités socio-spatiales dans les villes métropolitaines, les conséquences de niveaux élevés d'informalité économique, et les formes de gouvernance et de conjonction politique. Adoptant la perspective de Boaventura Santos que la pandémie est une crise supplémentaire ajoutée à plus de quatre décennies de crise liée à la domination du capitalisme financier néolibéral, l'article étudie les indications que la pandémie a renforcé les mouvements à la recherche d'alternatives, discutant des possibilités et des limites des formes de résilience populaire et des structures de résistance à la lumière des structures actuelles du pouvoir social et politique. Il conclut par quelques réflexions sur ce que la pandémie nous enseigne sur les transformations de la vie urbaine qui seraient bénéfiques dans une ère post-pandémique.*

**Mots clés :** Covid-19 ; urbanisme ; inégalités ; résistance ; processus politiques

**RESUMO:** Este artigo analisa as condições sociais e políticas que fizeram da América Latina um epicentro global da pandemia em 2020-2021. Aborda a questão dos impactos dos padrões de urbanismo no desenvolvimento da pandemia, considerando hierarquias urbanas, relações interurbanas e relações entre cidades e interiores rurais, além da estruturação das desigualdades socioespaciais nas cidades metropolitanas, as consequências dos altos níveis de informalidade econômica e formas de governança e conjunturas políticas. Adotando a perspectiva de Boaventura Santos de que a pandemia é uma crise adicional somada a mais de quatro décadas de crise ligada ao domínio do capitalismo neoliberal financeirizado, o artigo investiga indícios de que a pandemia fortaleceu movimentos em busca de alternativas, discutindo as possibilidades e limitações de formas de resiliência popular e resistência à luz das estruturas atuais de poder social e político. Conclui com algumas reflexões sobre o que a pandemia nos ensina sobre as transformações da vida urbana que seriam desejáveis em uma era pós-pandemia.

**Palavras-chave:** Covid-19; Urbanismo; Desigualdades; Resiliência; Processos políticos.

## **INTRODUCCIÓN**

Este trabajo adopta una perspectiva regional comparativa. Analiza las condiciones sociales y políticas que hicieron América Latina un epicentro global de la pandemia en 2020-2021 (Galindo y Rivas Molina, 2021), prestando atención especial al papel de sus padrones de urbanización. El análisis se enfocará en dos problemas principales: primero, los altos grados de desigualdad social e informalidad económica en la región, y segundo, su vida política, herencias de una historia nacionalmente diferenciada, pero con elementos en común. También quiero destacar el valor de tomar una perspectiva “desde abajo” sobre las reacciones de las clases populares a la pandemia, las cuales tienen caras distintas, pero a veces han mostrado formas de “resiliencia” y auto organización creativa, y en algunos países, nuevos indicios de “resistencia” a los modelos de desarrollo económico y sistemas políticos establecidos.

Por lo tanto, parece que la pandemia está intensificando formas de crisis sistémica preexistentes, con potenciales séqueles regionales, aún si las especificadas de distintas historias nacionales siguieran teniendo un peso fuerte en conformar el futuro. Como Boaventura Santos (2021, p.19) plantea, ya que la pandemia ha intensificado los impactos sociales de más de cuarenta años del capitalismo neoliberal financiarizado, “no es una situación de crisis claramente opuesta a una situación normal”. Para Boaventura, la cuestión clave es si la pandemia fortaleciera un movimiento hacia un “nuevo normal” radicalmente diferente al anterior, en base a una renovación de la discusión de alternativas que ha quedado parada dentro de sistemas políticos democráticos. En este respecto, tal vez haya indicios más animadores en América Latina en la coyuntura actual que en los otrora centros imperiales. Cualquier “optimismo de la voluntad” debe ser atemperado por el hecho de que los que pensaron que los llamados “nuevos movimientos sociales” iban a producir una transformación de fondo de las estructuras de poder y formas de hacer la política en la región después de la restauración de la democracia quedaron un poco decepcionados. Sin embargo, parece que la

pandemia ha aumentado los niveles de desconformidad popular con el modelo de desarrollo neoliberal y con el desempeño de las clases políticas establecidas, algo que podría producir cambios importantes en algunos países en un futuro no tan lejano.

## **PANDEMIA Y URBANIZACIÓN EN UN MUNDO INTERCONNECTADO**

Con 79% de su población viviendo en asentamientos clasificados como “ciudades”, en 2020 América Latina fue la segunda región del mundo en términos de su grado de urbanización, después de la región norte de las Américas, cuya población urbana alcanzó el grado de 82%, pero un poco delante de Europa, con 75% de población urbana (Szimigiera, 2021). El problema de estas estadísticas generales es que no dan cuenta de variaciones entre países en términos de variaciones estructurales en sus jerarquías urbanas, las relaciones entre ciudades, interiores rurales, y el mundo externo, y las relaciones entre distintos tipos de asentamientos urbanos. En el contexto de la pandemia, como señalan Arantes y Pereira en este dossier, las estructuras y dinámicas de redes interurbanas, sociales y económicas, junto con sus modos de gobernanza política, son de suma importancia para entender la transmisión del virus fuera de las ciudades metropolitanas, las cuales, en general, fueron el punto de su entrada original en los territorios latinoamericanos como consecuencia de su mayor conexión con otras regiones del mundo en las cuales el virus ya estaba circulando. Tanto en Buenos Aires como en São Paulo, viajeros de las clases más económicamente acomodadas regresando a casa desde Europa trajeron el virus consigo, llevando a la infección posterior de las clases populares metropolitanas y las ciudades del interior, aunque en el caso de Guayaquil, Ecuador, las comunidades más pobres fueron afectadas de una manera más inmediata por causa del regreso de residentes que habían trabajado como migrantes en España (Moser, 2020).

En el caso de Brasil, Nicolelis et al. (2021) han construido un modelo del proceso de difusión del virus en territorio nacional desde sus puntos de entrada en la “ciudad global” de São Paulo y 16 otras

ciudades con aeropuertos internacionales, las cuales llaman “super-spreader cities”, responsables por entre 98% y 99% de los casos reportados durante los primeros tres meses de la pandemia. Demuestran que 26 carreteras federales fueron responsables por 30% de la difusión al interior del país, pero que el aumento de casos en el interior produjo un efecto “bumerán”, porque la mayoría de las unidades de cuidados intensivos se encuentran en hospitales en las capitales de los estados. La necesidad de transportar pacientes muy enfermos desde el campo a estas unidades no solamente empeoró sus posibilidades de sobrevivir la infección, sino también aumentó el registro de muertes en las ciudades receptoras. Por lo tanto, Nicoletis et al. concluyen que el saldo de muertes habría sido significativamente menor si las autoridades hubieran impuesto cuarentenas estrictas de inmediato en las capitales desde las cuales el virus se difundió e introducidos controles estrictos sobre el movimiento por las carreteras, y que una distribución espacial más socialmente equitativa de unidades de cuidados intensivos también hubiera salvado muchas vidas. Sin embargo, en el caso de Argentina, donde el gobierno federal impuso cuarentenas y controles sobre movimientos interurbanos al principio de la pandemia, el posterior relajamiento de restricciones domésticas junto con un control limitado sobre fronteras llevó a una segunda onda y reimposición de restricciones, en un contexto en que el programa de vacunar a la población no había avanzado al paso inicialmente esperado debido a una limitada disponibilidad de vacunas. En los casos del Perú y Ecuador, el regreso de migrantes urbanos a sus comunidades de origen en el altiplano aumentó la crisis sanitaria por causa de los raquíticos servicios médicos disponibles en zonas rurales. En toda la región, una pandemia que empezó en las ciudades no quedó en las ciudades, pero las desigualdades entre campo y ciudad en términos de la infraestructura de la salud pública tuvo un impacto propio.

Dentro de las ciudades, los impactos diferenciados de Covid-19 en términos de tasas de infección y muerte sobre distintas clases sociales han causado las desigualdades sociales al fondo de la vida urbana salir a la luz de una manera extraordinaria, aunque no totalmente sin precedentes históricos, como Di Virgilio y Perelman señalan en su discusión de la fiebre amarilla en Buenos Aires en este

dossier. Lo mismo podría decirse también en el caso de la pandemia global de la llamada “gripe española” de 1918, sobre todo en lo que se refiere a condiciones de hacinamiento residencial e higiene. La difusión internacional de la pandemia en este caso fue provocada por la circulación de soldados durante la primera guerra mundial. Hasta cierto punto, el rápido desarrollo de vacunas eficaces contra Covid-19 distingue esta pandemia de otros en el pasado. Sin embargo, el caso de Chile en 2021 demostró que una campaña de vacunación relativamente oportuna nos es suficiente para acabar con la crisis de la pandemia si se afloja otras restricciones y no se atiende a los factores sociales atrás de la transmisión del virus.

La forma más adecuada de medir el impacto mortal de la pandemia es en términos de la medida de “exceso de mortalidad”, comparando la tasa en 2020 con la de los años antes de la pandemia, en lugar de usar una medida de tasas de mortalidad por cada 100,000 habitantes, la cual sería más afectada por problemas con los registros de causas de muerte. En términos de medidas de “exceso de mortalidad”, según un estudio realizado por su Ministerio de Salud reportado en el periódico *Página 12* (<https://www.pagina12.com.ar/323483-coronavirus-la-mejor-manera-de-comparar-a-la-argentina-con-b>), la provincia de Buenos Aires salió con un saldo más favorable en 2020 en comparación no solamente con Brasil y México sino también con los Estados Unidos, España e Inglaterra. Por otro lado, la gravedad del impacto de la pandemia en México se mostró mucho mayor usando la medida de “exceso de mortalidad”, porque su sistema de salud público había sido debilitado por décadas de políticas neoliberales de recortes de presupuesto y muchos de los más pobres fueron obligados a recurrir a servicios privados de baja calidad. Los hospitales de la red pública no consiguieron internar a grandes números de pacientes, dejándolos morir en sus casas sin diagnóstico de Covid-19 (Phillips; Nuño, 2021). Después de revisar sus cifras en términos de “exceso de mortalidad”, el Perú llegó a tener la peor tasa de mortalidad por cápita en la región, principalmente en consecuencia de las deficiencias de los servicios médicos disponibles en su interior rural (Rochabrun, 2021). El Perú también es el país donde la nueva cepa lambda del virus fue identificada por primera vez.

Si sus altos niveles de desigualdad social constituyen un factor común en la crisis del Covid-19 en América Latina, aumentando las dificultades de alcanzar una gestión política-administrativa adecuada de la pandemia, esto nos lleva a cuestionar los modelos actuales del urbanismo tanto en términos de las jerarquías urbanas e interurbanas y relaciones rural-urbanas como en términos de la organización socioespacial de las ciudades.

## **EL URBANISMO LATINOAMERICANO**

Las grandes aglomeraciones de población en ciudades metropolitanas ofrecen una cantidad importante de ventajas a todas las clases sociales. Desde el punto de vista de las clases más acomodadas, ofrecen mejores facilidades para disfrutar la cultura “alta” y las artes, muchas opciones para disfrutar de una variedad de estilos culinarios y formas de pasatiempos, deportes y gimnasios. Son los lugares de residencia más conectados con el mundo exterior, tanto por motivos del turismo como por motivos de negocios. Sus amplios y variados sectores de consumo de servicios y productos ofrecen oportunidades de empleo de distintos tipos, formales e informales. Hay una amplia variedad de empleos ligados a escritorios, informática, educación, y salud para trabajadores capacitados, y las grandes ciudades abrigan las sedes de corporaciones nacionales y transnacionales, instituciones financieras y aseguradoras, además de empresas dedicadas a consultorías, publicidad y mercadotecnia. Este tipo de economía urbana genera una gran cantidad de empleos secundarios, en limpieza y servicios de comida dentro de lugares de trabajo, por ejemplo, sin hablar de los servicios domésticos en los hogares de las clases con mayores ingresos. Además, el efecto multiplicador de los empleos urbanos ofrece un sinnúmero de posibilidades a trabajador@s informales que ofrecen servicios y productos baratos, incluso a otr@s trabajador@s informales.

Por otro lado, la “desindustrialización prematura” que resultó de la liberalización del comercio internacional a partir de los años ochenta del siglo pasado (Castillo; Martins, 2021; Hoyos López, 2017) redujo las oportunidades que existían durante la época de la

industrialización sustitutiva de importaciones para conseguir trabajo formal con plenos derechos laborales y protección social, provocando una transferencia de mano de obra hacia los servicios y hacia la informalidad. Ha aumentado la precariedad de las condiciones de habitar de las capas menos privilegiadas de la población urbana, de la misma medida en que ha provocado más migración desde zonas rurales e incluso de otros países dentro de la región en donde las oportunidades de ganarse la vida son aún más limitadas. La inversión privada en las grandes ciudades ha sido concentrada en sus partes más nobles en términos de nuevos proyectos inmobiliarias y las facilidades disponibles a las familias más acomodadas que viven en estas zonas. Sin embargo, dichas inversiones también han desplazado a residentes anteriores de comunidades más pobres, por la vía de la gentrificación, ejemplificado por el fenómeno pasajero de la “favela chic” en Rio de Janeiro (Torresan, 2020), y por la vía más duradera de rehabilitar barrios antiguos en los centros históricos de ciudades como patrimonio histórico apto para el turismo (Collins, 2015). La inversión pública en infraestructura, incluyendo redes de transporte urbanas, en general se ha conformada a una lógica capitalista que refuerza el legado histórico de estructuras de desigualdad social en base a diferencias de clase, raza y etnia para reproducir una ciudad dividida y socialmente segregada, aunque no necesariamente segregada en términos espaciales, ya que comunidades pobres pueden existir inmediatamente al lado de barrios de residencias de alto lujo. A pesar de proyectos dirigidos a “urbanizar” la periferia urbana e “integrarla” más a la ciudad formal, acompañados por medidas orientadas a regularizar la tenencia de la tierra en asentamientos formados por invasiones, la experiencia de la pandemia ha mostrado que las inversiones en la infraestructura de los barrios donde viven los trabajadores más pobres no han sido adecuadas para resolver sus problemas de acceso cotidiano a agua, limpieza de agua, sanitación adecuada, condiciones físicas y hacinamiento de viviendas, falta de espacios públicos, y seguridad contra inundaciones y desprendimientos de tierras. Al contrario, el crecimiento y desarrollo de la “ciudad formal” muchas veces sigue empeorando las condiciones aún de aquellas comunidades irregulares consolidadas cuyas resi-

dentes no han sido desplazados a lugares más espacialmente periféricos e inseguros. Los que quedan en su lugar en una metrópoli cuyo desarrollo conforma al modelo de urbanismo neoliberal se han encontrado obligadas a “verticalizar” las viviendas existentes por falta de espacio para crecer horizontalmente, ya que tampoco existen viviendas alternativas a precios o alquileres accesibles en otras zonas de la ciudad.

Existía un sinnúmero de motivos para cuestionar la racionalidad social de este modelo de desarrollo urbano antes de la pandemia, incluyendo el impacto ambiental del complejo urbano en su conjunto y de los estilos de vida que promueve. Dicho impacto ambiental no es simplemente local. Como demuestra Graham (2016), hay una relación directa entre las torres de vidrio, concreto y acero que dominan el paisaje urbano de las grandes ciudades y el nuevo delirio de actividad minera característica del “neoextractivismo” o “reprimarización” de las economías de América Latina, cuyas consecuencias negativas, ambientales y sociales, caen principalmente sobre zonas rurales y muchas veces indígenas. Todo que tiene que ver con la infraestructura de la nueva economía digital, concentrada en las ciudades, también tiene un precio ambiental en términos de la extracción de minerales y uso de energía. Hasta las criptomonedas no son tan “virtuales” como pueden aparecer, ya que los computadores que hacen los cálculos necesarios para mantener la “minería” de las criptomonedas consumen más energía que países del tamaño de Holanda.<sup>1</sup> Además, la combinación de aglomeración de población con su segregación social produce retos ambientales adicionales. Por un lado, la construcción de condominios, sobre todo condominios verticales en base a torres, tiene impactos no solamente sobre áreas verdes, bosques y selvas, sino también sobre el abastecimiento de agua y su nivel de contaminación, la estructura del subsuelo y los sistemas de drenaje, los cuales con frecuencia perjudican a comunidades pobres vecinas. Por otro lado, es necesario desarrollar nuevos sistemas de transporte masivo para llevar a los trabajadores desde sus hogares a sus lugares de trabajo, muchas veces acompañados por vías rápidas para autos cuya función es la de permi-

<sup>1</sup> As the price of bitcoin has climbed, so has its environmental cost. *The Economist*, 14 de mayo de 2021. Disponible en: <https://www.economist.com/graphic-detail/2021/05/14/as-the-price-of-bitcoin-has-climbed-so-has-its-environmental-cost>. Acceso en: 15 de mayo 2021.

tir a las capas más acomodadas de la sociedad urbana a transitar sus espacios sin tener que meterse directamente a las zonas habitadas por las capas más pobres.

Un ejemplo revelador de los problemas que pueden surgir de la necesidad de construir sistemas de transporte masivo para facilitar el acceso de aquellos trabajador@s pobres que residen en barrios espacialmente periféricos a los centros de las ciudades metropolitanas es la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Inaugurada en 2012, bajo una administración capitolina centroizquierdista encabezada por el actual ministro de relaciones exteriores en el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, el proyecto fue plagado desde su principio de problemas muy típicas de las grandes obras públicas en México (Pantoja, 2021). El costo inicial del proyecto salió mucho más caro que el previsto, hubo indicios de corrupción durante su implementación, y fallas en el diseño e ingeniería del proyecto se pusieron de manifiesto casi de inmediato después de la inauguración. Esto obligó al gobierno de la ciudad a suspender el servicio en la línea temporalmente en 2014. Ha seguido obligado a financiar obras de mantenimiento y reparación de una manera permanente, aunque últimamente dichos esfuerzos parecen haber sido reducidos por causa de las políticas de austeridad fiscal “republicana” implementadas tanto a nivel federal como a nivel de la ciudad, cuya alcaldesa es del mismo partido que López Obrador, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). A pesar de las inversiones adicionales en el mantenimiento de la línea, una de sus secciones elevadas colapsó en mayo de 2021, provocando la caída de un tren, con un saldo de 26 personas muertas y más de 70 heridas.

La línea 12 conectó el centro metropolitano con barrios pobres al sur de la ciudad poblados por migrantes, muchos de ellos provenientes de los estados pobres en el sur del país, antes tan marginados que ni eran consideradas partes integrales de la ciudad. La tarifa establecida por hacer el viaje era barata. Sin el metro, viajar hacia el centro no solamente cuesta más, pero también dura horas más, y muchos residentes no quieren viajar en autobús por causa de la amenaza de robos y asaltos. Tláhuac, el barrio al final de la línea, sigue padeciendo de los problemas de drenaje, infraestructura hidráulica

y alumbrado típicos de zonas espacialmente periféricas en donde los sueños de la mayoría de los habitantes consisten en la esperanza de mudarse desde una choza hacia un terreno en donde pueden erigir una casa por sus propios esfuerzos. Después de la caída del tren, sus residentes han entrado en una crisis económica aún más grave que las dificultades provocadas por el Covid-19. Esto no quiere decir que la pandemia no ha golpeado duramente a Tláhuac y otras colonias pobres del sur de la ciudad, donde la informalidad del trabajo deja a la mayoría sin acceso a sistemas de protección social, mientras que los residentes de las colonias más acomodadas han sufrido mucho menos porque han tenido la posibilidad de “quedarse en casa” (Jaramillo Molina, 2021). Víctimas tanto de una extrema desigualdad social como de la segregación espacial, ya los residentes de Tláhuac se sienten relegados otra vez por el desastre del metro a la “marginalidad” en que vivían entre su llegada a la ciudad en los años setenta y ochenta y la construcción de la línea 12 (González Díaz, 2021).

Por otro lado, la caída del tren suscitó un sinnúmero de observaciones sobre las posibles relaciones entre defectos de ingeniería y decisiones de “economizar” tanto por parte del gobierno capitalino como por parte de las empresas contratadas de construir el metro y operar los trenes. El tramo que colapsó fue construido por la compañía Carso Infraestructura y Construcción, parte del Grupo Carso del magnate Carlos Slim, poniendo a la mira pública su relación con la administración de Marcelo Ebrard. Sea que sea la conclusión definitiva sobre las causas del desastre, podemos sugerir en términos más generales que, aunque la urbanización característica de las grandes metrópolis suele producir importantes “economías de escala” para empresas, también implica un sinnúmero de “externalidades” sociales negativas no reconocidas por los mercados capitalistas. Dichas externalidades son sujetas a controles poco adecuados por parte de los poderes públicos en América Latina, donde el capital inmobiliario y las constructoras ejercen una influencia importante en la vida política y el financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos, incluyendo los partidos de la centroizquierda. Esto nos lleva a la cuestión del papel de los sistemas políticos en la gerencia de la pandemia en América Latina.

## **POLÍTICA, NEOLIBERALISMO Y “RESISTENCIAS” POPULARES**

Cuando se acabó el “boom de los commodities” que permitió los gobiernos de la “marea rosa” en América Latina implementar políticas redistributivas, el regreso al poder de las derechas políticas disfrutando del apoyo de las elites económicas nacionales e internacionales resultó en recortes de gastos públicos que perjudicaron a la infraestructura de los servicios de salud públicos y a los sistemas de protección social, en reducciones en el valor real de los salarios y derechos laborales de los trabajadores en el sector formal, y en un nuevo aumento de la precariedad e informalidad. Políticas que obligaron a los trabajadores y pequeños empresarios a pagar los costos de la nueva recesión económica mientras que las elites más económicamente poderosas se ampararon dejaron la región en una situación delicada para enfrentar la pandemia. Los impactos de las cuarentenas rigurosas, ejemplificadas por Argentina en la primera onda del Covid-19, podrían ser aliviados por medio de apoyos gubernamentales, pero no fueron suficientes para proteger el bienestar de las familias más pobres frente a una inflación de los precios de los alimentos y otros gastos básicos. Por otro lado, optar por una política de minimizar las medidas para limitar la circulación del virus y no frenar la economía, como se hizo en Brasil, tampoco dio resultados buenos a pesar de un programa de pagos relativamente generosas en 2020, ya que la segunda onda fue catastrófica en 2021, no solamente en términos epidemiológicos sino también en términos de la economía, desempleo y el aumento de la pobreza y hambre.

Tampoco hubo mucho para festejar inicialmente en el caso de México, a pesar de tener un nuevo gobierno declarado “a favor de los pobres”. La “austeridad republicana” del gobierno encabezado por López Obrador, vendida como una solución a la arraigada corrupción dentro del estado mexicano, no permitió la recuperación del sistema de salud público de las décadas de desgaste impuesto por políticas neoliberales. Sin embargo, otros cambios que López Obrador ha hecho en las políticas sociales pretenden acabar con el modelo neoliberal de “administrar” la pobreza. Durante las administraciones anteriores,

México siguió a pie de la letra las recomendaciones del Banco Mundial para aliviar la pobreza por medio de programas de transferencias monetarias condicionadas, pero la administración de López Obrador canceló la última versión de estos programas, llamado *Progres*a. Declarándose a favor de beneficios universales, introdujo becas universales para estudiar a alumnos de familias de bajos ingresos y pensiones a los que no tenía este beneficio en base a contribuciones. Como demuestra González de la Rocha (2020), dificultades económicas habían minado las bases de sistemas de ayuda mutua entre familias pobres en las ciudades metropolitanas mexicanas. Las mujeres que trabajan han sido especialmente castigadas por causa de esta tendencia, ya que se puso cada vez más necesario pagar por ayuda en el cuidado de sus hijos. Beneficios universales podrían mejorar su situación comparada con los sistemas de transferencias monetarias condicionadas, que en el mejor de los casos les costaban tiempo en términos de asistir a las reuniones con funcionarios para probar que estaban cumpliendo con las condiciones y, en el peor de los casos, imposibilitaban su registro en el programa por causa de compromisos laborales (Escobar y González, 2008). Como DuBois (2021) señala en el caso del programa *Asignación Universal por Hijo para Protección Social* introducido en Argentina durante la última administración de Cristina Kirchner, los programas universales disminuyen las posibilidades de manipular los programas por fines del clientelismo político, declarado un objetivo principal de sustituir beneficios condicionados por beneficios universales por López Obrador. Sin embargo, DuBois también demuestra que el programa argentino llevaba a madres pobres a contratar nuevas formas de endeudamiento, ya que fue necesario tener una cuenta y tarjeta bancaria para obtener el beneficio. Gago y Mezzadra (2015) han argumentado que esto representa una consecuencia general de la financiarización tanto de la economía social como de los programas sociales, la cual es otra modalidad de las “operaciones extractivistas” abiertas al capital por causa de la “reprimarización” económica que permite a los “gobiernos progresistas” usar las rentas que capturan de las operaciones capitalistas en el campo de la extracción de recursos naturales para financiar los apoyos ofrecidos a las poblaciones pobres en las ciudades.

Los riesgos latentes en una profundización de la financiarización de la vida de los pobres urbanos por causa del endeudamiento se pusieron evidentes en el contexto de los intentos de los gobiernos del Partido de los Trabajadores de mejorar el acceso a bienes de consumo de los pobres en Brasil por medio de la extensión del otorgamiento de tarjetas de crédito por parte de los bancos. En el contexto mexicano, nuevos problemas de endeudamiento también surgieron en el caso de familias más acomodadas a partir de la introducción, en 1997, de pensiones “capitalizadas”, estilo chileno, otra vez por recomendación del Banco Mundial. En este tipo de sistema los beneficiarios escogen entre planes administrados por el sector privado en lugar de pagar contribuciones a un fondo administrado por una entidad pública. En condiciones de mayor precariedad económica que también afectó a las clases medias, junto con privatización de servicios, muchas veces tenían que escoger entre ahorrar dinero para su jubilación o gastar en la educación de sus hijos, medicinas y servicios de salud (Gallardo, 2021).

Un mayor aumento de endeudamiento personal es uno de los aspectos más preocupantes de las consecuencias económicas de la pandemia, que amenazan a intensificar las contradicciones preexistentes provocadas por el papel del sector privado en el modelo neoliberal de la “nueva gestión pública” (Shore; Wright, 2015) y por el papel dominante del sector inmobiliario y financiero en la conformación socioespacial de las ciudades (Rolnik, 2019). El peso del capital financiero y los bancos privados ha aumentado a pesar de la crisis financiera de 2008 y el alto costo a los contribuyentes de los rescates de bancos que fueron necesarios en los centros financieros globales. A la luz de sus consecuencias sociales y sus aportaciones importantes a la reproducción de la desigualdad tal vez la pandemia produjera un nuevo debate sobre las ventajas de transformar todos los bancos en utilidades públicas, ya que las operaciones de los bancos privados dependen del estado y su banco central de una manera esencial (Wright, 2019). Sin embargo, en el caso de Brasil, la tendencia bajo el gobierno de Bolsonaro ha sido la contraria. Las elites económicas brasileñas prestaron su apoyo al ultraderechista Jair Bolsonaro cuando se comprometió con políticas ultraneoliberales estilo chileno,

nombrando al banquero y otrora “Chicago Boy” Paulo Guedes como su ministro de economía. Irónicamente, mientras que Bolsonaro estaba apostando en este modelo, la paciencia de los chilenos con la herencia neoliberal de la dictadura de Pinochet llegó a agotarse.

En 2019 hubo una nueva onda de manifestaciones masivas en Chile. La respuesta represiva de la segunda administración de Sebastián Piñera a las manifestaciones y su gestión de la pandemia aumentó la crisis a pesar de su promoción precoz de la vacunación, obligando al presidente aceptar un referéndum sobre la constitución. La inconformidad frente al aumento de la pobreza y desigualdad, la privatización de la educación y el sistema de pensiones capitalizados ya llegó a incluir a partes de las clases medias, insatisfechas con los apoyos económicos ofrecidos por el gobierno y su negativa a permitirles sacar dinero desde sus fondos de pensiones para mitigar la crisis. Los comicios para elegir a los integrantes de la asamblea constituyente produjeron un rechazo generalizado de la clase política establecida, incluyendo los principales partidos que colaboraron en los gobiernos de la concertación centroizquierdista después de la dictadura, el Partido Socialista y el Partido Cristianodemócrata. Los candidatos independientes de los partidos políticos existentes ganaron casi un tercio de los escaños. Dos coaliciones que salieron adelante fueron una coalición de partidos de izquierda y verde ecologistas, incluyendo los comunistas, y una segunda coalición integrada por movimientos sociales, dando una voz sin precedentes en la política chilena a los movimientos indígenas, feministas y LGBTQ (Farinelli, 2021). Las elecciones a la asamblea constituyente mostraron un deseo general para que el país tomara un rumbo diferente en su desarrollo. Sin embargo, no faltan ejemplos de países en donde nuevas constituciones “progresistas” no han producido los resultados esperados.

Colombia es uno de ellos. En 2021, en medio de una segunda onda brutal de la pandemia, se estallaron paros, bloqueos, y protestas, a las cuales el gobierno de Iván Duque también respondió con una represión policial feroz. Las protestas iniciales fueron motivadas por un intento de imponer una reforma tributaria que pretendía hacer a las clases medias y obreras pagar más para financiar nuevos programas de

apoyos a los más pobres. Fueron generalizadas, pero en el caso de Cali surgió un movimiento militante de jóvenes residentes en el distrito de Aguablanca, una “villa de miseria” periférica poblada por cientos de miles de personas, incluyendo afrocolombianos e indígenas víctimas de los desplazamientos forzados provocadas por alianzas entre intereses capitalistas y grupos paramilitares (Escobar, 2015).

En este caso, se puede ver como nuevas formas de hacer la política pueden surgir en los márgenes de una sociedad. Estigmatizada por otros residentes de la ciudad no solamente como una comunidad de invasores, a pesar de un lento programa de regularización de derechos a la ocupación del suelo, sino también como comunidad de insurgentes y criminales, Aguablanca es un lugar en donde el hostigamiento policial ha sido una experiencia cotidiana para jóvenes que carecen de trabajos estables, y acceso a la educación y servicios médicos. En entrevistas con periodistas, tanto mujeres como hombres declararon que “no tenían nada que perder, porque no tenían nada” (Pardo, 2021). Dijeron que estaban recurriendo a tácticas que el gobierno y muchos otros residentes de la ciudad tachaban de “vandalismo” para conseguir “voz” y ser escuchados. Una madre de 24 años declaró que estaba luchando por un futuro mejor para su niña de seis años, y para su madre, a pesar de haber dejado de hablar con ella porque era de “una tendencia política distinta”. Quería que a su mamá “no le privaticé la salud y pueda recibir el tratamiento de diabetes que necesita”. Otros declararon que querían la oportunidad de ir a la universidad para estudiar carreras como ingeniería.

Aunque sus tácticas militantes provocaron rechazo por algunos otros segmentos de un movimiento de protesta heterogéneo y descentralizado, los jóvenes insurgentes de la periferia urbana se dedicaron a construir un bastión de lucha, bautizado Puerto Resistencia, que ofrece un modelo “prefigurativo” de la nueva sociedad que quieren. Convirtieron una estación de policía en una biblioteca para l@s niñ@s y un salón comunal fue transformado en “misión médica”. Además, parece que consiguieron algo que la policía nunca consiguió hacer: eliminar la amenaza de sufrir violencia cruzando las fronteras entre los territorios controlados para distintas bandas criminales. Organizaron ollas comunitarias para asegurar la alimentación de todas y to-

dos. Replicando la diversidad étnica de sus comunidades de origen, abogan no solamente por su propia inclusión social sino también por la justicia y convivencia étnica y racial, la justicia ambiental en términos de infraestructura y servicios, y viviendas dignas. Acompañaron su rebelión con actividades culturales mostrando la creatividad de las culturas populares híbridas y mixturadas.

La apuesta principal del gobierno de Duque, y atrás de ello, el bloque de poder encabezado por el expresidente Álvaro Uribe, fue que la población en general se cansara de los impactos de los paros y bloqueos sobre el abastamiento de sus hogares y su capacidad de llegar a su trabajo. La apuesta de los movimientos de protesta fue que una mayoría de los colombianos estuvieran hartos no solamente de un modelo de desarrollo neoliberal socialmente excluyente, sino también de la violencia que ha sido una característica a largo plazo de esta sociedad, cuyo último proceso de paz ha fracasado bajo el mando de una élite que ni cumple con sus promesas ni tiene capacidad para negociar. Aunque ministros del gobierno han insistido en que Colombia es víctima de subversión externa, también echaron la culpa por el caos al líder de la izquierdista política electoral, Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá. En su juventud Petro andaba en el movimiento guerrillero M-19, pero se convirtió en político profesional después de participar en el constituyente que escribió la constitución “progresista” de 1991. Hoy aboga por una política izquierdista moderada, enfocada en la creación de un estado de bienestar social completo e incluyente. Aún ser de la centroizquierda es peligroso en Colombia, donde el asesinato de sindicalistas y todo tipo de activistas ha seguido siendo rutina en la época pos-Uribe, pero dada la fuerza de las movilizaciones, cambios más profundos ya parecen posibles, caso los diversos movimientos descentrados logren aglutinarse políticamente.

Sin embargo, el reto de aglutinar fuerzas es considerable en América Latina, como demostraron las elecciones en Ecuador en 2021. El banquero neoliberal Guillermo Lasso ganó en la segunda ronda debido a la división entre el movimiento encabezado por el inhabilitado y exiliado expresidente Rafael Correa y el movimiento indígena Pachakutik, cuyo candidato, Yaku Pérez Guartambel,

se declaró un integrante de una “izquierda ecológica” opuesta a la izquierda “autoritaria y corrupta” de Correa (Zibell, 2021). Correa, igual a Evo Morales en Bolivia (Canessa, 2014), había provocado conflictos con parte de la población indígena en torno al papel del extractivismo de recursos naturales en su estrategia redistributiva. Las “izquierdas” latinoamericanas son heterogéneas, y el caso brasileño demuestra las dificultades que un gobierno de izquierda moderada puede encontrar en gobernar. Los gobiernos petistas dependían de una política de concertación con otras fuerzas políticas que impidió medidas más radicales para reducir el poder de las elites, complicando sus relaciones con los movimientos sociales de los “sin techos” y “sin tierras”. También tenían que lidiar con un aparato institucional permeado por funcionarios con perspectivas sociales y políticas opuestas, no solamente en las corporaciones castrenses y policiales, sino también en el sistema judicial. Estos problemas no son exclusivamente brasileños.

Es interesante pensar en las semejanzas y diferencias entre formas de “resistencia” militante en una periferia urbana colombiana y lo que Bento y Couto (2021) llaman la “resiliencia” de Paraisópolis, una enorme favela en São Paulo que se convirtió en un icono de las desigualdades urbanas brasileñas a través de fotografías que contrastan sus casas superpobladas con las residencias de lujo adyacentes en el próspero distrito de Morumbi, que alberga la residencia oficial del gobernador del estado, uno de los mejores hospitales privados de São Paulo y su principal estadio de fútbol. En diciembre de 2019, la policía invadió una fiesta de baile funk en Paraisópolis y mató a nueve jóvenes. El menor tenía 14 años y el mayor 23 años. Gilson Rodrigues, presidente de la Unión de Residentes, encabezó la protesta de su comunidad cuando una investigación policial interna declaró que los oficiales responsables habían actuado en “legítima autodefensa” en busca de criminales violentos (Stabile, 2020). Aunque el gobierno de Bolsonaro ha extendido una “licencia a matar” sin precedentes a la policía operando en las favelas, que ha descatado ordenes de la Corte Suprema de suspender sus operaciones durante la pandemia, las políticas de seguridad pública de los gobiernos petistas también reprodujeron una construcción política de los residen-

tes de la periferia urbana como una amenaza al resto de la sociedad urbana. Tanto en este como en los otros casos anteriormente discutidos, se trata de históricamente arraigados problemas estructurales en la sociedad y el sistema político.

En febrero de 2020, un residente de Morumbi regresando desde Europa fue identificado como una de las primeras víctimas brasileñas del Covid-19. Descartando el discurso de Bolsonaro sobre el Covid-19 como “gripezinha”, los líderes comunitarios de Paraisópolis concluyeron que durante la pandemia que iba a venir, su comunidad iba a ser golpeada mucho más fuertemente que Morumbi. El agua que tenía la comunidad estaba contaminada, el distanciamiento social era imposible en residencias multigeneracionales hacinadas, y las ambulancias no entraban en la favela. Además, Bolsonaro expulsó a los médicos cubanos traídos por el gobierno del PT para trabajar en clínicas dentro de comunidades pobres. Los líderes no esperaban ayuda de ningún nivel de gobierno (Galarraga Cortázar, 2020). Nombraron a 652 voluntarios llamados “presidentes de la calle” para hacerse cargo de monitorear a 50 familias cada uno, un modelo similar al modelo utilizado en las respuestas cubanas a emergencias de salud. Transformaron dos escuelas comunitarias en centros de aislamiento para reducir las posibilidades de que aquellos con síntomas infectaran a otras. Contrataron tres ambulancias privadas y llevaban a los pacientes en camilla en zonas donde las calles eran demasiado estrechas para que entraran las ambulancias directamente.

Aunque muchos residentes normalmente salen de la favela para trabajar, la pandemia les costó a algunos su trabajo, incluidas personas que trabajaban en el servicio doméstico en Morumbi, despedidas sumariamente después de que sus empleadores adinerados decidieran ponerse en cuarentena. Cocinas comunitarias fueron creadas para que nadie pasara hambre, mientras que las organizaciones comunitarias trataban de ayudar a los residentes a encontrar nuevos trabajos. Las calles fueron limpiadas, alcohol gel para manos distribuido, y el proyecto comunal cooperativa “Coser Sueños” comenzó a producir máscaras (Bento; Couto, 2021, p.12). Gran parte de este esfuerzo reutilizó proyectos sociales desarrollados anteriormente para mejorar la vida en la comunidad y ayudar a los residentes con problemas especiales,

como las mujeres víctimas de violencia doméstica, algo que refleja la participación activa de mujeres en organizaciones comunitarias e iglesias. Sin embargo, también involucró innovaciones en la organización comunitaria, ejemplificadas no solamente por los presidentes de la calle, sino también por la aplicación de la planificación y la previsión. Reconociendo que la población estaba siendo bombardeada por desinformación sobre la pandemia, los líderes comunitarios se esforzaron en dar a la comunidad información científicamente certificada. Todo esto no implica que Paraisópolis era una comunidad totalmente solidaria y sin individualismo. Un líder observó que, aunque la organización preexistente ayudaba, fue necesario desarrollar nuevas prácticas para construir una red de solidaridad comunitaria ya que “el pueblo no tenía la costumbre de ayudarse unos a otros” (ibíd.). Bento y Couto (2021, p.14) concluyen que Paraisópolis mostró una resiliencia *dinámica* en su “capacidad de generar nuevas estructuras sociales en respuesta a un cambio ambiental”.

Lo mismo puede decirse de muchas otras comunidades de la periferia urbana brasileña que contaban con una organización comunitaria efectiva. Sin embargo, la resiliencia comunitaria de Paraisópolis encontró límites. Sus logros organizativos dependían de las donaciones de individuos pedidas por las redes sociales y de los esfuerzos de recaudación de fondos de la organización no gubernamental G10 Favelas, que promueve el “emprendimiento” comunitario para el desarrollo de una economía social en las favelas, y recogió donaciones para suministrar recursos como alimentos, máscaras y kits de higiene para hacer frente a la pandemia en otros estados brasileños. Las medidas adoptadas para limitar el impacto de la pandemia sobre la salud en Paraisópolis tuvieron éxito inicialmente, manteniendo la tasa de mortalidad en 21.7 por cada mil habitantes en comparación con una tasa municipal de 56.2. Desafortunadamente, en septiembre de 2020, las muertes habían aumentado en un 237%, y las donaciones se estaban disminuyendo, imposibilitando el mantenimiento del servicio de ambulancias (Goldenbaum, 2020). El municipio anunció que las clases se reanudarían en octubre, poniendo fin al uso especial de las escuelas como centros de aislamiento. A medida en que el gobierno abría todos los sectores de la economía de

nuevo, la favela fue invadida por el virus a una escala creciente una vez que sus trabajadores reanudaron el uso del transporte público para llegar a su trabajo en otros distritos de la ciudad formal.

Por lo tanto, la resiliencia de la comunidad se vio socavada no sólo por la falta de apoyo de las autoridades políticas, sino por la falta de medidas gubernamentales adecuadas para contener la pandemia. Esto tuvo mucho que ver con la rivalidad política entre el gobernador de São Paulo, João Doria, y Bolsonaro. El papel del estado sigue siendo importante, ya que las comunidades pueden ser capaces de desarrollar soluciones innovadoras a sus propios problemas, pero necesitan no solamente recursos para hacerlo sino también transformaciones del ambiente, tanto social como físico, en que sus residentes están “resistiendo” para conseguir una vida mejor. Como demuestran Torres et al. en su artículo en este dossier, la “gobernanza disruptiva” del gobierno federal brasileño representa un caso extremo. Aunque la diseminación de desinformación sobre Covid-19 en las redes sociales es un problema global, su diseminación desde el corazón del gobierno de Bolsonaro fue algo más especial. El gobierno federal impedía los intentos de los gobiernos estatales y municipales de introducir encierros y promover el uso de máscaras y el distanciamiento social mientras que continuaba promoviendo “tratamientos” cuyo valor clínico había sido refutado. Esto provocó la acusación de que la determinación de Bolsonaro de poner la economía abierta por encima de la salud pública equivalía a “promover una estrategia institucional de propagación del virus” (Asano et al., 2021, p.6).

Aunque la pandemia ha producido ejemplos de colaboración entre autoridades políticas estatales y municipales ligadas a partidos de distintas orientaciones ideológicas, como Arantes y Pereira demuestran en este dossier, no solamente Brasil sino muchos otros países han visto intentos de politizar la pandemia como un arma más para seguir las luchas por el poder dentro del campo de la “política normal” como el negocio de una clase política profesionalizada. Se puede sacar provecho político tanto del cansancio de los ciudadanos con las cuarentenas, y las pérdidas que provocan en términos de empleos y ingresos, como de las dificultades en conseguir cantidades adecuadas de vacunas. Tanto en América Latina como en otras

regiones, las frustraciones provocadas por intentos más firmes de controlar la transmisión del virus han sido aprovechados para abogar por la “libertad” contra la “dictadura covidiana”, una frase popular en los medios sociales que se aprovechan de la desconfianza popular con sus autoridades para sembrar teorías de conspiración. Aunque los movimientos anticuarentenas y antivacunas tienen distintos vertientes y motivos, como Di Virgilio y Perelman señalan en este dossier, cabe enfatizar que en cualquier contexto las personas que no quieren aceptar las restricciones o ser vacunadas deben pensar en su deber social de disminuir la transmisión del virus, un deber de cuidar al “otro” que invalida los argumentos libertarios que reivindican el derecho del individual de escoger su propio camino.

La pandemia ha provocado una amplia gama de reclamaciones y reivindicaciones que muestran una desconformidad con las actuales estructuras del poder económico. Trabajo en el sector de entregas a casa aumentó considerablemente en contextos en que las personas más acomodadas pudieron quedarse en casa para trabajar. Sin embargo, mientras que los lucros de grandes empresas, y las fortunas de sus dueños, aumentaron estrepitosamente, en muchos casos los ingresos y condiciones de trabajo de sus empleados empeoraron, por causa de la imposición de nuevas metas de desempeño y por ser considerados personas trabajando por su propia cuenta en lugar de empleados con derechos a protección social. Desde Argentina a México, hubo movilizaciones para demandar un trato mejor, una demanda que podía fundarse en el hecho que fueron clasificados como “trabajadores esenciales” durante la pandemia, pero no valorizados como tal. Lo mismo puede decirse de trabajador@s en los servicios de salud, en la línea de frente del combate médico al virus, y las personas trabajando en el sector de cuidar a los ancianos vulnerables. Otros sectores, igualmente esenciales, y duramente castigados por enfermedad y muerte durante la pandemia, son l@s trabajador@s, muchas veces migrantes, que laboran en bodegas y empacadoras de carnes, frutas y verduras en ambientes cerrados, donde el factor de riesgo está aumentado no solamente por las condiciones de sus viviendas sino también por las condiciones físicas de su trabajo y falta de suministro de equipo protector adecuado. Por lo tanto, la pande-

mia ha provocado cuestiones fundamentales sobre la valorización social de distintos tipos de trabajo y los principios que gobiernan la distribución de la riqueza social.

Una de las soluciones siendo debatidas es la de ofrecer un ingreso universal básico, tal vez no solamente a los ciudadanos de un país, sino también a todos sus residentes, para incluir a los trabajadores migrantes (Ferguson, 2015, p.213). Una ventaja de garantizar un nivel de seguridad económica adecuado a tod@s, podría ser la de permitir a las personas buscar la vida liberada de la necesidad de trabajar directamente por el capital, en la economía social y solidaria, por ejemplo (Wright, 2019), aún si la economía “social y popular” no esté totalmente desconectada de los circuitos del capital financiero. Sin embargo, el ingreso básico universal fue propuesto, en la forma de un impuesto negativo sobre los ingresos, por uno de los fundadores del modelo neoliberal, Milton Friedman. Podría ser compatible con una mayor reducción de gastos en sistemas públicos de salud, educación y protección social, dejando a todo el mundo conseguir atención por medio de proveedores privados, y todo depende del nivel real de la transferencia no condicionada. Para revolucionar los actuales padrones de distribución de la riqueza social y la debida remuneración de los trabajadores “esenciales”, no será posible evitar la cuestión de transformar los sistemas tributarios de una manera que provocaría una reducción permanente de las desigualdades tanto de riqueza como de ingresos, tal como Piketty (2020) ha señalado. El impuesto extraordinario sobre grandes fortunas adoptado por el gobierno argentino y el congreso chileno para lidiar con los impactos inmediatos de la crisis podría ser considerado un avance, aunque sea relativamente modesto, y resistido por algunos integrantes de la elite nacional. Sin embargo, en el caso de Brasil, no solamente hay una tradición de ofrecer concesiones tributarias a grandes empresas sino también indultos por lo que niegan a pagar en términos de impuestos, contribuciones al sistema de seguro social, y multas por violaciones de leyes laborales y ambientales. Impuestos sobre herencias son relativamente ligeros en todo América Latina, y todavía faltan controles eficaces sobre la ingeniería financiera que permite a las elites transferir sus fortunas a paraísos fiscales.

Tal vez no sea exagerado concluir que en América Latina los ricos serían capaces de pagar los costos de la crisis de la pandemia en términos de aliviar su impacto duradero sobre las economías familiares y el bienestar social. Sin embargo, el reto político de disminuir diferencias de riqueza sigue siendo enorme pese al hecho de que la desigualdad social ha creado un ambiente especialmente favorable al virus.

### **CONCLUSIÓN: ¿HACIA UNA NUEVA CIUDAD POSPANDÉMICA?**

La pandemia ha reforzado los argumentos del movimiento verde sobre las ventajas tanto sociales como ambientales de acabar con los largos viajes diarios entre la casa y el lugar de trabajo. Se puede imaginar una transformación de las estructuras urbanas actuales en base a una localización de actividades y servicios en barrios separados por mayores espacios verdes y zonas agroecológicas, lo cual reduciría las externalidades negativas de la ciudad y también ofrecería mejor protección a sus residentes contra los aumentos de temperaturas provocados por el cambio climático. El trabajo remoto también podría transformar los centros dominados por torres de acero y vidrio. Sin embargo, no es posible pensar en nuevas formas de urbanismo sin pensar en las actuales reglas de la vida económica. Por ejemplo, los empleados que no quieren volver a trabajar en sus escritorios después de la pandemia muchas veces quieren mudar su residencia fuera de la ciudad, pero la llegada de forasteros económicamente más acomodados suele provocar un aumento de los precios y alquileres de casas. Esto puede tener impactos negativos para miembros de la población local que no disfrutaban de salarios tan generosos, ya que tendrán mayores dificultades en conseguir un lugar para vivir, y si consiguen, tendrán menos dinero para gastar en otras necesidades después de pagar una renta más alta. Es imposible separar la cuestión de reconstruir la vida urbana pospandémica sin pensar en cuestiones de distribución de ingresos y de la riqueza social.

La pandemia ha castigado duramente a trabajador@s que viven en casas hacinadas en barrios con graves defectos de infraestructura y que no han podido “quedarse en casa” aun cuando in-

fectad@s por el virus por falta de apoyo económico adecuado para que sus familias sigan comiendo. Sin embargo, aunque el impacto de la pandemia en América Latina ha sido agravado por su nivel de informalización de trabajo y las limitaciones de sus sistemas de protección social, es importante reconocer que las desigualdades sociales y regionales exacerbadas por las políticas neoliberales de los últimos cuarenta años han producido resultados similares en los otrora centros imperiales. En la región metropolitana de Manchester, Inglaterra, la expectativa de vida ha caído durante la pandemia (Institute of Health Equity, 2021). Sus servicios médicos son inferiores a los del sur del país, un factor que contribuyó a una tasa de muerte 25% mayor que el promedio nacional durante la pandemia. Tiene un grave déficit de habitaciones a costos accesibles y enfrenta una onda de desahucios cuando los controles impuestos durante la pandemia acaben, mientras que su centro urbano principal sigue siendo desarrollado por inmobiliarios construyendo torres de apartamentos para residentes más acomodados, con el respaldo de un ayuntamiento controlado por un partido de la centroizquierda que vende tierras públicas a precios bajos. Sus desigualdades socioeconómicas tienen fuertes dimensiones etnoraciales.

La urbanista brasileña Raquel Rolnik provocó indignación entre los conservadores británicos cuando publicó algunas reflexiones derivadas de su trabajo entre 2008 y 2014 como Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada. Rolnik criticó las implicaciones de sus “reformas” del estado de bienestar social para un país que sufría un déficit de vivienda social para familias de bajos y medianos ingresos, con 13 millones de personas viviendo en la pobreza, de las cuales más de la mitad eran pobres que trabajaban (Rolnik, 2019). Investigaciones sobre el crecimiento de la indigencia en el Reino Unido por el Rowntree Trust han dado la razón a las comparaciones poco usuales que Rolnik hizo entre América Latina y Gran Bretaña (Fitzpatrick et al., 2018; Joseph Rowntree Foundation, 2021). Las acciones del gobierno británico durante la pandemia no han sido suficientes para frenar un aumento dramático adicional de la pobreza alimentaria, aún con respecto a una situación que había empeorado año tras año a partir de la crisis

de 2008 bajo políticas de austeridad fiscal. 8.4 millones de británicos vivían con la inseguridad alimentaria en mayo de 2021 (Pautz; Dempsey, 2021). Además, los contratos otorgados, sin licitación, a compañías privadas por el gobierno de Boris Johnson para enfrentar la pandemia han provocado críticas tanto por su falta de transparencia y alto costo al contribuyente, como por sus pésimos resultados. Es común criticar los gobiernos latinoamericanos por los mismos vicios, pero la pandemia también ha revelado problemas estructurales de fondo en los sistemas democráticos anglosajones.

En todos los contextos, los problemas de infraestructura y habitación en zonas de pobreza urbana no pueden ser resueltos solamente en base a acciones dentro de estas zonas, sino necesitarán una reconfiguración más radical del espacio urbano, para evitar que la construcción en barrios ricos no perjudica a vecinos pobres, entre otras consideraciones. Si no fuera por el peso actual del sector inmobiliario en la administración y política urbana, se podría imaginar proyectos para transformar edificios abandonados en los centros urbanos, los cuales con toda probabilidad serán más numerosos como consecuencia de la pandemia, en conjuntos de apartamentos con alquileres accesibles para aliviar el déficit de habitaciones sociales. Esta idea ha sido planteada por la vía de ocupaciones organizadas por movimientos sociales en ciudades latinoamericanas, pero la lógica especulativa del capital inmobiliario financiarizado junto con los prejuicios sociales impide esta solución. Sin embargo, sean las que sean las posibilidades de transformar los centros de grandes ciudades en espacios de sociabilidad entre clases en base a transformarlos en lugares de habitación más democráticos, parece recomendable pensar en una política de “reconstruir mejor” después de la pandemia que prestará atención a reducir los costos tanto sociales como epidemiológicos de las formas de desigualdad que conformaban el paisaje urbano antes de la llegada del virus. La pandemia nos ha dado motivos para pensar en una redistribución espacial menos centralizada de las actividades urbanas, entre ciudades de tamaños diferentes, entre capitales y ciudades provincianas, y entre ciudades y zonas rurales, y en las posibilidades de transformar ciudades metropolitanas en una serie de aldeas urbanas conectadas y más socialmente incluyentes.

Sin embargo, aunque los problemas no sean únicos a América Latina, las condiciones políticas y sociales que conforman sus padrones de segregación urbana serán difíciles de trascender mientras que se reproducen las arraigadas estructuras de discriminación racial, la seguridización de las desigualdades sociales y económicas, la ciudad en que policías militarizadas mantienen a cada quien “en su debido lugar”, el cultivo de miedo del “otro” menos afortunado, la “limpieza social” de los centros de ciudades típico del urbanismo neoliberal, y la segregación social asociada con el condominio cerrado. Ya que arraigados problemas de criminalidad y violencia también influye en las actitudes de las clases obreras que no viven en la periferia urbana, y no son solamente integrantes de las elites que tachan a los beneficiarios de programas para aliviar la pobreza de “vagos no merecedores”, el sueño de eliminar la pobreza por medio de mejorar los ingresos de toda la fuerza laboral, dignificar todas las formas de trabajo, extender la protección social a toda la sociedad, y ofrecer oportunidades de movilidad social a la próxima generación por medio de la educación, sigue siendo una condición imprescindible para conseguir un mejoramiento de la sociabilidad urbana. Si escuchamos a las voces de la periferia urbana, aún los más rebeldes están planteando demandas totalmente razonables de inclusión, reconocimiento, y justicia social, racial, y ambiental. La pandemia ha arrojado luz no solamente sobre las desigualdades sino también sobre la resiliencia de comunidades pobres y su capacidad de construir alternativas prefigurativas para toda la sociedad.

## REFERENCIAS

- ASANO, C.L.; VENTURA, D. de F. L.; AITH, F.M.A; REIS, R.R.; RIBEIRO, T.B. Direitos na pandemia: mapeamento e análise das normas jurídicas de resposta à Covid-19 no Brasil. *Boletim* nº. 10. São Paulo: Cepidisa y Conectas, 2021.
- BENTO, F.; COUTO, K.C. A behavioral perspective on community resilience during the COVID-19 pandemic: the case of Paraisópolis in São Paulo, Brazil. *Sustainability*, Basel, Vol.13, nº.1447, pp. 1-18, 2001. <https://doi.org/10.3390/su13031447>.
- CANESSA, A. Conflict, claim and contradiction in the new ‘indigenous’ state of Bolivia. *Critique of Anthropology*, London, Vol. 3 nº. 2, pp. 153–73, 2014. <https://doi.org/10.1177/0308275x13519275>.
- CASTILLO, M.; MARTINS NETO, A. Premature deindustrialization in Latin America. *Production Development Series*, nº. 205. Santiago, Chile: ECLAC, 2021. Disponible en: <https://www.cepal.org/en/publications/40241-premature-deindustrialization-latin-america>. Acceso en: 15 julio 2021.
- COLLINS, J. F. *Revolt of the saints: memory and redemption in the twilight of Brazilian racial democracy*. Durham, NC, & London: Duke University Press, 2015.
- DUBOIS, L. The trouble with money: Argentina’s conditional cash transfers. *Dialectical Anthropology*, Heidelberg, Vol. 45 nº. 1, pp. 99–115, 2021. <https://doi.org/10.1007/s10624-020-09617-y>.
- ESCOBAR, A. Territorios de diferencia: la ontología política de los ‘derechos al territorio’. *Cuadernos de Antropología Social*, Buenos Aires, nº. 41, pp. 25–38, 2015.
- ESCOBAR LAPATÍ, A.; GONZÁLEZ DE LA ROCHA, M. Girls, mothers and poverty reduction in Mexico. In: RAZAVI, S. (Org.). *The gendered impacts of liberalization: towards embedded liberalism?* New York: Routledge/UNRISD, 2008, pp. 435–68.
- FARINELLI, V. Chile: um país onde o povo está mudando o curso da história. *Carta Maior*, 18 de mayo de 2021. Disponible en: <https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Pelo-Mundo/Chile-um-pais-onde-o-povo-esta-mudando-o-curso-da-historia/6/50608>. Acceso en: 18 mayo 2021.
- FERGUSON, J. *Give a man a fish: reflections on the new politics of distribution*. Durham, N.C. & London: Duke University Press, 2015.

- FITZPATRICK, S.; BRAMLEY, G.; SOSENKO, F.; BLENKINSOPP, J. *Destitution in the UK*. York: Joseph Rowntree Foundation, 2018. Disponible en: <https://www.jrf.org.uk/report/destitution-uk-2018>. Acceso en: 16 julio 2021.
- GAGO, V.; MEZZADRA, S. Para una crítica de las operaciones extractivas del capital: patrón de acumulación y luchas sociales en el tiempo de la financiarización. *Nueva Sociedad*, Buenos Aires, n.º. 255, pp. 38-52, 2015.
- GALARRAGA GORTÁZAR, N. Paraisópolis, uma favela contra o vírus. *El País Semanal*, 4 de octubre de 2020. Disponible en: [https://brasil.elpais.com/brasil/2020/09/28/eps/1601301353\\_524719.html](https://brasil.elpais.com/brasil/2020/09/28/eps/1601301353_524719.html). Acceso en: 20 julio 2021.
- GALINDO, J.; RIVAS MOLINA, F. América do Sul, epicentro mundial da pandemia. *El País Brasil*, 29 de junio de 2021. Disponible en: <https://brasil.elpais.com/sociedade/2021-06-29/america-do-sul-epicentro-mundial-da-pandemia.html>. Acceso en: 16 julio 2021.
- GALLARDO KISHI, S. 2021. ¿A qué le tiras cuando ahorras, mexicano? Los futuros del ahorro bajo un régimen pensionario neoliberal de capitalización individual. *Encartes*, Cidade do México, Vol. 4, n.º. 2, pp. 8–28, 2021. <https://doi.org/10.29340/en.v4n7.168>.
- GOLDENBAUM, C. 2020. A Brazilian favela is combating covid through community. *City Monitor*, 29 de septiembre de 2020. Disponible en: <https://citymonitor.ai/community/public-health/a-brazilian-favela-is-combatting-covid-through-community>. Acceso en: 16 julio 2021.
- GONZÁLEZ DE LA ROCHA, M. Of morals and markets: social exchange and poverty in contemporary urban Mexico. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Thousand Oaks, CA, Vol. 689, n.º. 1, pp. 26–45, 2020. <https://doi.org/10.1177/0002716220916700>.
- GONZÁLEZ DIAZ, M. Accidente en Línea 12: los barrios periféricos de Ciudad de México que quedaron “marginados” tras la tragedia del metro. *BBC News Mundo*, 8 de mayo de 2021. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57035197>. Acceso en: 9 mayo 2021
- GRAHAM, S. *Vertical: the city from satellites to bunkers*. London and New York: Verso, 2016.
- HOYOS LÓPEZ, M. Trade liberalization and premature deindustrialization in Colombia. *Journal of Economic Structures*, Heidelberg, Vol. 6 n.º. 1, pp. 1-30, 2017. <https://doi.org/10.1186/s40008-017-0095-6>.

Epílogo: reflexiones sobre la pandemia y las sociedades urbanas.

- INSTITUTE OF HEALTH EQUITY. *Build back fairer in Greater Manchester: health equity and dignified lives*. London: University College London, 2021. Disponible en: <https://www.instituteofhealthequity.org/resources-reports/build-back-fairer-in-greater-manchester-health-equity-and-dignified-lives>. Acceso en: 20 julio 2021.
- JARAMILLO MOLINA, M.E. La pandemia contra los pobres: la Ciudad de México y COVID-19, LSE Blogs, 2021. Disponible en: <https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2021/03/02/la-pandemia-contra-los-pobres-la-ciudad-de-mexico-y-covid-19/>. Acceso en: 20 julio 2021.
- JOSEPH ROWNTREE FOUNDATION. *UK poverty 2020/21*, York: Joseph Rowntree Foundation, 2021. Disponible en: <https://www.jrf.org.uk/report/uk-poverty-2020-21>. Acceso en: 20 julio 2021.
- MOSER, C. O. N. Mothers, daughters, fathers and sons: intergenerational family social capital and inequalities in Guayaquil, Ecuador. *Environment and Urbanization*, London, Vol. 33, n.º. 1, pp. 193–210, 2020. <https://doi.org/10.1177/0956247820959026>
- NICOLELIS, M. A. L.; RAIMUNDO, R.L.G.; PEIXOTO, P.S.; ANDREAZZI, C.S. The impact of super-spreader cities, highways, and intensive care availability in the early stages of the COVID-19 epidemic in Brazil. *Scientific Reports*, Heidelberg, Vol. 11, n.º. 130, pp. 1–12, 2021. <https://doi.org/10.1038/s41598-021-92263-3>.
- PANTOJA, S. El metro: una bomba de tiempo. *Proceso*, México, n. 2323, 9 de mayo de 2021, pp. 6-12, 2021.
- PARDO, D. ‘Se metieron con la generación que no tiene nada que perder’: los ‘excluidos’ de Cali que armaron un fuerte de resistencia y fiesta. *BBC News Mundo*, 14 de mayo de 2021. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57110382>. Acceso en: 20 de mayo 2021.
- PAUTZ, H.; DEMPSEY, D. COVID-19: how the pandemic increased food poverty in the UK. *The Conversation*, 28 de mayo de 2021. Disponible en: <https://theconversation.com/covid-19-how-the-pandemic-increased-food-poverty-in-the-uk-161620>. Acceso en: 30 de mayo 2021.
- PHILLIPS, T.; NUÑO, A. A Mexican tragedy: country’s crippling covid crisis comes into sharp focus. *The Guardian*, 3 de abril de 2021. Disponible en: <https://www.theguardian.com/global-development/2021/apr/03/a-mexican-tragedy-countrys-crippling-covid-crisis-comes-into-sharp-focus>. Acceso en: 15 de mayo 2021.

- PIKETTY, T. *Capital and Ideology*. Cambridge, MA, & London: Harvard University Press, 2020.
- ROCHABRUN, M. In Peru's hinterland, a town battles world's worst COVID-19 outbreak. *Reuters*, 4 de junio de 2021. Disponible en: <https://www.reuters.com/world/americas/perus-hinterland-town-battles-worlds-worst-covid-19-outbreak-2021-06-04/>. Acceso en: 15 de junio 2021.
- ROLNIK, R. *Urban warfare: housing under the empire of urban finance*. London & New York: Verso, 2019.
- SANTOS, B. de S. *La cruel pedagogía del virus*. Buenos Aires: Transnational Institute y CLACSO, 2021. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1gm01nn>.
- SHORE, C.; WRIGHT, S. Audit culture revisited: rankings, ratings, and the reassembling of society. *Current Anthropology*, Chicago, Vol. 56, nº. 3, pp. 421–44, 2015. <https://doi.org/10.1086/681534>.
- SZMIGIERA, M. Urbanization by Continent 2020, Statista.com, 2021. Disponible en: <https://www.statista.com/statistics/270860/urbanization-by-continent/>. Acceso en: 15 de junio 2021.
- STABILE, A. Corregedoria vê 'legítima defesa' de PMs na ação em que morreram nove jovens em Paraisópolis. *El País Brasil*, 8 de febrero de 2020. Disponible en: <https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-02-08/corregedoria-ve-legitima-defesa-de-pms-na-acao-em-que-morreram-nove-jovens-em-paraisopolis.html>. Acceso en: 10 de junio 2020.
- TORRESAN, A. Playing the game: precarity and the dilemma of land rights in a gentrifying favela. In: Evans, G. (Org.). *Post-industrial precarity: new ethnographies of urban lives in uncertain times*. Wilmington, DE: Vernon Press, 2020, pp. 49–74.
- WRIGHT, E. O. *How to be an anticapitalist in the twenty-first century*. London & New York: Verso, 2019,
- ZIBELL, M. Elecciones Ecuador 2021: 4 claves para entender la derrota del correísmo. *BBC Mundo*, 12 de abril de 2021. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56715672>. Acceso en: 15 de abril 2021.